



"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte" Ignacio Ellacuría

Editorial

2

Difícil situación del FMLN

Político

4

El FMLN no da el paso

Económico

6

La creación de la nueva política agrícola

Económico

10

El sistema de pensiones en El Salvador: el costo de la inseguridad

Regional

12

Reformar el neoliberalismo

Reporte IDHUCA

15

Los gritos del silencio

**Proceso: Veinticinco años
analizando la realidad nacional**

Difícil situación del FMLN

Decir que el FMLN no ha logrado superar el impacto de la derrota electoral de marzo pasado es volver sobre algo que se ha repetido hasta la saciedad. Sin embargo, no es irrelevante insistir sobre lo mismo una vez más, por cuanto que ese hecho refleja con pasmosa contundencia la incapacidad del partido de izquierda para enfrentar a sus propios fantasmas. Ante todo, el fantasma de la renovación interna: la palabra “renovación” no sólo ha sido usada con los propósitos más bajos —asociados en la mayoría de casos a meras disputas por el poder—, sino que ha sido demonizada. Esto último ha impedido a los dirigentes históricos del FMLN asumir y llevar adelante con seriedad los necesarios cambios al interior de su organización. Es innegable que el FMLN ha cambiado desde que era un ejército guerrillero hasta su conversión en partido político, pero esos cambios no han sido todo lo sustantivos que debieran. Más aun, se ha tratado de cambios más forzados por las circunstancias que por una toma de conciencia de la necesidad de revisar sus fundamentos organizativos e ideológicos.

Las coyunturas favorables —o al menos leídas de ese modo por sus principales figuras— han afianzado las resistencias para una renovación (o redefinición) del FMLN, dejando a sus abanderados sin trincheras desde las cuales defender sus posturas. Las coyunturas desfavorables han dado pie a la posibilidad de llevar nuevos aires al partido, pero quienes se oponen a cualquier cambio en su interior, lejos de favorecer el florecimiento de otras formas de conducirlo, han cerrado filas y se han empeñado en defender sus posiciones y el poder que las sostiene. Esta ha sido la historia del FMLN desde 1992 hasta la fecha; es por ello que las expulsiones, las huidas y el fraccionamiento han sido una constante en su desenvolvimiento como partido político. La situación actual del FMLN es un capítulo más en este interminable vaivén de resistencias y ansias de cambio, en el que se mezclan, a veces indiscriminadamente, buenos propósitos —es decir, propósitos nobles y sinceros— con ambiciones e intereses de poca monta.

A la par del fantasma de la renovación, está el fantasma de la identidad del FMLN. A estas alturas, no es totalmente claro qué es el FMLN —o qué ofrece a la sociedad— en términos ideológicos. Algo se sabe acerca de ello: en los estatutos del partido se habla de socialismo, revolución y democracia como referentes ideológicos. Pero no hay—ni se ha elaborado hasta ahora— un planteamiento que, además de desarrollar cada uno de esos aspectos, los articule y los convierta en criterio de orientación práctica para sus bases, mandos medios y cuadros dirigentes. Como es natural, esto no se puede hacer sin debate y sin discusión, en los cuales deben ventilarse distintas posturas y distintos puntos de vista. Tampoco es algo que deba hacerse de un día para otro, bajo presiones coyunturales o como respuesta a presiones de la opinión pública, sino con el tiempo suficiente y las convicciones bien cimentadas en torno a un propósito que debería ser el de todos los efemelenistas: forjar un partido a la altura de las necesidades de la

sociedad salvadoreña en el momento actual. Cumplida esta tarea, que ciertamente no es fácil, viene la siguiente: elaborar una propuesta de gestión gubernamental que, además de ser una opción a la emanada de la derecha, sea factible y realista.

Obviamente, sin claridad ideológica no puede haber claridad en las propuestas; a lo sumo, lo que se tendrá es un conjunto desarticulado de principios no del todo coherentes entre sí, un listado de recetas políticas elaborado para responder a coyunturas electorales y comportamientos ambiguos, en los que se mezclen el radicalismo de los puros con la condescendencia de los moderados. El resultado de esta amalgama no será otro que un partido sin identidad, sin proyecto y sin credibilidad (o con una credibilidad volátil, que baja o sube según cada coyuntura).

Eso es el FMLN, no como resultado de su último fracaso electoral, sino como resultado de su incapacidad —de la incapacidad de sus dirigentes históricos— para asumir con la seriedad debida los desafíos planteados por una sociedad compleja y cambiante como lo es la sociedad salvadoreña de principios del siglo XXI. Amoldar al partido a esos desafíos y no al revés: ese es el reto que los dirigentes históricos del FMLN no han podido asumir. No pudieron hacerlo inmediatamente después de firmada la paz, cuando las cinco organizaciones que hicieron la guerra todavía estaban juntas, ni lo hicieron después quienes se quedaron con los despojos del partido. Ahora mismo, no es esto lo que ocupa a los efemelenistas: de nueva cuenta, son las disputas y las rivalidades mezquinas las que consumen sus energías.

Pese al FMLN, la sociedad salvadoreña sigue con sus ritmos, sus problemas y sus ansias. El gobierno de Elías Antonio Saca ha ofrecido resolver esos problemas y encauzar las ansias de los salvadoreños por las sendas de la tranquilidad y el bienestar. Se podrá ser todo lo pesimista que se quiera acerca de estos ofrecimientos, se podrá augurar su fracaso más rotundo. Sin embargo, lo que no se puede negar es que la cuarta administración de ARENA le está arrebatando al FMLN una bandera que, pese a sus debilidades ideológicas y políticas, le ha dado hasta el día de hoy buenos resultados electorales: el compromiso social. El FMLN podrá estar muy en contra de ARENA, pero sería descabellado que se resistiera o saboteara las políticas sociales emanadas del gobierno de Saca. ¿Qué hacer entonces? Lo que el FMLN debió haber hecho hace tiempo y que en la actualidad se vuelve una tarea impostergable: decirse y decirle a la sociedad qué tipo de izquierda quiere ser, qué es lo que ofrece como tal, cómo va a realizar eso que ofrece, por qué se ha de confiar en ella y qué es lo que la hace preferible a otras opciones políticas.

No es poco lo que se pide (y espera) del FMLN, pero es lo que el partido está obligado a hacer si no quiere seguir a la deriva, más a la espera de los desaciertos de su principal oponente que de los logros que pueda obtener por sus propios méritos y su propio desempeño.

El FMLN no sigue el paso

Hay mucho de cierto en los comentarios que actualmente se escuchan acerca del funcionamiento del FMLN. En el partido de izquierda el autoritarismo característico de algunos de sus dirigentes amenaza con provocar una nueva desbandada. De hecho, si bien es cierto que no es la primera vez que se hacen públicas las divisiones internas en este partido, todo parece indicar que el desencuentro entre los dirigentes está tomando un cariz distinto, más radicalizado y de mayor odio entre unos y otros campos. Los acontecimientos que reporta la prensa nacional en torno a los pleitos entre efemelenistas de diferentes filiaciones en la Alcaldía de San Salvador, puede constituir un buen barómetro para medir la divergencia e irresponsabilidad entre schafikistas y oscaristas.

Se habla de despidos en los consejos municipales. Tanto uno como el otro bando estaría iniciando una purga en contra de sus adversarios. Hasta se habla de llevar a los tribunales el pleito interno en el partido de izquierda. De la misma manera, el tribunal de ética del partido ha expulsado a varios militantes, por lo que considera comportamientos inapropiados con los valores de la organización. No cabe duda que, tal como se ha apuntado en la prensa, estas expulsiones suenan a revancha política y deseo de control interno por parte de la actual dirigencia.

Parece que el mecanismo más fácil para controlar a los opositores es condenarlos al ostracismo. Es una manera curiosa de entender la democracia por parte de un partido que se ufana de ser el principal baluarte de la democratización del país.

Desde marzo la tormenta se ha arreciado en el FMLN. La pelea abierta entre sus dirigentes, no sólo lo mantiene a la zaga, sino que le hace perder puntos frente a un electorado que se ha declarado contrario a la línea política impuesta por su dirigencia.

De hecho, las diferentes encuestas declaran que la gran mayoría de los salvadoreños desaprueban la conducción de la actual cúpula. Ni siquiera las señales de cambio de Handal, ni su histórico apretón de mano con el presidente Saca en los jardines de Casa Presidencial, han servido para apaciguar las cosas. Al contrario, las imágenes sirvieron para aumentar el descrédito de este dirigente que muchos consideran como un líder caprichoso, dispuesto a bloquear las posibilidades políticas de su partido con tal de imponer sus ambiciones personales y satisfacer su ego desmedido.

Para hacerse una idea del letargo político que se vive en el FMLN basta con observar la ocupación completa que ha logrado el partido oficial de la arena nacional. Desde su toma de posesión, Saca se ha llevado todas las palmas. Ha calmado el debate político con buen tino y una buena dosis de "comunicación", aprovechando los constantes desaciertos de su oponente. El cuarto presidente arenero sigue apelando a su talante de concertador y de cercanía con los salvadoreños y sus problemas para desactivar y evitar cualquier enfrentamiento político con sus adversarios de izquierda.

Hay suficientes elementos para afirmar, en la línea de una tesis enarbolada por la derecha en estos días, que el partido de izquierda está siendo desbordado por Saca. De seguir así las cosas, en las próximas elecciones legislativas y municipales de 2006, el FMLN sería barrido otra vez por ARENA. En efecto, el nuevo presidente parece decidido a dar la batalla en el campo de la izquierda. Habla sin complejo de los temas sociales y presenta un discurso voluntarioso, dedicado a seducir a los salvadoreños. Desde su llegada a la presidencia, ha multiplicado anuncios y visitas de inauguración de "obras sociales", como muestra de su deseo de estar cerca de los

salvadoreños más necesitados.

Si se combina este discurso con los evidentes problemas internos que vive el partido de izquierda, se entiende mejor la situación de perplejidad en que se encuentran muchos de sus simpatizantes. De hecho, Saca da la sensación de querer tener éxito en el terreno en que han fracasado estrepitosamente sus predecesores areneros. Además, se habla profusamente de concertación y se da una muestra de respeto y voluntad de diálogo con los opositores.

Es temprano para medir los resultados concretos de las diferentes propuestas de Saca. Sin embargo, para el propósito de estas líneas, que pretenden situar el contexto actual del partido de izquierda, es suficiente con lo apuntado. Si en un sistema de partidos el comportamiento de los distintos actores tiene consecuencias sobre la realidad y la vida de los otros, es correcto pensar que lo que pasa actualmente con el partido ARENA, la sensación de nuevo liderazgo que destilan sus dirigentes, obliga a un serio cuestionamiento al FMLN y a sus dirigentes para ajustar su manera de entender la política.

Es precisamente esta capacidad de reacción que se encuentra en entredicho y que los últimos acontecimientos reseñados más arriba han venido a poner en evidencia. Por lo menos un sector importante en el partido de izquierda cuestiona fuertemente la conducción de sus actuales dirigentes en la coyuntura presente del país. A continuación, se intentará dar una respuesta a las preguntas por el camino más adecuado para el FMLN dentro de su situación política interna, tomando en cuenta su relevancia como partido político dispuesto a ganar las elecciones.

¿Cuál es el camino de la renovación del FMLN?

Ante las crisis recurrentes que vive el partido de izquierda, es bastante lógico pre-

guntarse cuál es el camino para evitar el problema y favorecer la renovación de esta organización. Como ha quedado demostrado después de varias expulsiones de dirigentes históricos, el FMLN sigue siendo el partido de oposición más importante del país, no obstante las defecciones de figuras emblemáticas. Pero, al mismo tiempo, si bien este partido se ha beneficiado de la irrelevancia de los otros partidos de oposición, no deja de llamar la atención el hecho de que sigue a la zaga de ARENA, sin poder dar el salto hacia el control del Ejecutivo. En este sentido, la estrategia de enfrentamiento electoral con el partido gobernante ha sido un rotundo fracaso. Toda vez que no se ha podido materializar el objetivo primordial que consiste en hacerse del control de los más altos cargos estatales.

Algunos piensan que la mejor manera de resolver de una vez por todas la crisis recurrente en el FMLN pasa por una discusión seria y profunda que replantee la identidad de esta organización en un nuevo contexto de post guerra. Hay mucho de cierto en este planteamiento. En efecto, desde el fin de la guerra, la conversión del FMLN en partido político no ha dado lugar a una discusión interna sobre los objetivos políticos y su identidad partidaria. Además, muchas de las defecciones parecen tener un denominador común: tienen a la base una lectura política distinta de lo que debe ser el partido en la posguerra. Por eso, los descontentos suelen llamarse renovadores, en oposición a una dirigencia estancada en el tiempo.

De este modo, hay serios argumentos que invitan a iniciar una discusión reiteradamente postergada para definir la identidad del partido en este nuevo contexto de la vida nacional. Así, ganaría tanto el FMLN como El Salvador. Presentar una opción fuerte y creíble frente a ARENA insuflaría un nuevo dinamismo a la vida política que redundaría en beneficio de la democracia. De esta suerte, se crearían las condiciones para una ver-

análisis político

dadera competencia por el voto de los salvadoreños. Y, sin duda, las elites económicas que apoyan exclusivamente al partido de gobierno tendrían que revisar su estrategia, en tanto que el FMLN ya no daría más razones para que se le tilde de extremista y de antisistema.

Esta visión dominante de la situación en el FMLN, si bien interesante, merece complementarse con otro análisis, quizá más realista y más plausible en el camino de la renovación del FMLN. En primer lugar, la idea que hace descansar sobre las espaldas de los líderes efemelenistas todas las taras del sistema salvadoreño de partidos ha de revisarse. Este partido tiene, sin duda, su parte de responsabilidad en la apatía que suscita la vida política. Pero también la tienen los otros actores del sistema, cómplices del naufragio del sistema partidario.

Por otra parte, parece difícil confiar en que se dé una discusión sobre los principios ideológicos del FMLN, como mecanismo de solución de sus problemas internos. Por un lado, aunque se diera tal debate, ello serviría tan sólo para constatar las divergencias internas actuales entre las diferentes facciones en pugna. Además, un partido es un organismo vivo y dinámico que no puede pretender resolver de una vez para siempre la pregunta por su identidad. Ésta tiene que enfrentarse constantemente con el ambiente, particularmente en momentos especiales como lo son los eventos electorales para la vida democrática de un país. En este sentido, resolver la interrogante por la ideología, los proyectos, en fin la identidad del partido, en un debate de esta índole es un ejercicio que se debe realizar constantemente en el contexto del enfrentamiento de la organización con su ambiente.

Dicho lo anterior, más que hablar de una discusión especial en el FMLN sobre su identidad en el contexto del final del conflicto

armado, habría que fijarse en los instrumentos con que cuenta la organización para asegurar una renovación permanente de sus dirigentes y sus estrategias políticas. Desde este punto de vista, el FMLN es, sin duda el partido más moderno en el país. En sus estatutos dispone de un mecanismo democrático para enfrentar el espinoso problema de su renovación. Se supone que todos los militantes de la organización cuentan con la misma posibilidad de hacerse escuchar y presentar sus propuestas de renovación interna y de enfrentamiento con los adversarios políticos externos.

Tal como ocurre en cualquier país democrático, se espera que este mecanismo permita a todos los ciudadanos una participación efectiva en la vida política y tener la capacidad de presentar sus propias lecturas de la realidad nacional ante sus compatriotas. En los momentos de crisis, por ejemplo, se presentan diferentes opciones de solución que hacen patentes sus lecturas divergentes sobre la realidad. Al final, los ciudadanos eligen la mejor opción y la que juzgan más coherentes y realistas respecto del diagnóstico realizado. Lo mismo se esperaría que suceda en el caso del FMLN, puesto que sus estatutos hablan de una democracia interna en el más amplio sentido de la palabra.

Sin embargo, como se ha observado, no se ha podido materializar este ideal de democracia. Al contrario, en el FMLN las prácticas autoritarias y los líderes históricos se han anquilosado en las estructuras del partido. En este nivel tiene que plantearse el debate. En la medida en que funcionen los mecanismos democráticos del partido, en esta medida podrá superar sus problemas actuales. De lo contrario, seguirá expulsando a sus militantes inconformes y seguirá siendo presa fácil de la estrategia electoral arenera.

La creación de la nueva política agrícola

Durante la semana pasada, los sectores que conforman el agro salvadoreño estuvieron a la expectativa sobre la convocatoria realizada por el ministro de Agricultura para la creación de una nueva política agrícola consensuada. Mario Salaverría, ex director de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) y actual ministro de agricultura, se encuentra muy interesado en construir una política agraria beneficiosa para los productores y comercializadores del sector. Obviamente, para superar la crisis del agro, son necesarias ciertas medidas tales como la creación de una política agrícola que integre los aportes de los diferentes sectores involucrados, la creación de un Ministerio de Agricultura (MAG) más eficiente y moderno para atender las diversas necesidades de los subsectores, la formulación y puesta en práctica de políticas encaminadas a beneficiar a los pequeños productores.

En líneas generales, la política agraria en el quinquenio que inicia el nuevo gobierno busca enfocarse en los siguientes cultivos: frijol, hortalizas, frutas, algodón, maíz, sorgo y arroz. También en la carne de cerdo y los derivados de la crianza del ganado. La nueva política tratará de sacar del atolladero al sector agrícola. En palabras de la comisionada presidencial para la agricultura, Carmen de Sol, se trata de revitalizar la actividad agrícola que “ha estado tristemente abandonada”. Para lograr esta “revitalización”, es necesario crear una política que contenga medidas concretas y consensuadas.

La posición del Ejecutivo también se acompañó durante la semana anterior de un hecho importante: la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) decidió prorrogar hasta diciembre del presente año la suspensión de embargos que afectan a los pro-

ductores que tienen fuertes deudas con la banca. Esta medida sería un respiro para los deudores que, en la creación de una nueva política agraria, podrían encontrar la oportunidad de volver hacer rentables sus tierras.

La búsqueda del consenso

Desde una perspectiva socio-económica, el anuncio del ministro de Agricultura debe ser bien recibido por los diferentes sectores del país, ya que es una primera aproximación para construir una política agraria que busque solucionar la baja capacidad productiva del sector. Empero, también es importante reconocer que esta iniciativa puede tener algunas limitaciones. Hasta ahora, el MAG ha presentado un borrador que contiene aspectos que los representantes de las gremiales deben discutir. Cada uno de ellos deberá sugerir, opinar, añadir o quitar aspectos del documento de acuerdo a los intereses del sector al cual representan.

En esa dinámica, ¿estarán realmente representados los intereses de los pequeños productores agrícolas? No hay una respuesta segura, puesto que se ignora si estos participarán en las deliberaciones. ¿O será que sus intereses están implícitos en el siguiente postulado de Salaverría: “definir y poner en marcha medidas de apoyo a los pequeños agricultores”? No debe tomarse a la ligera una premisa de ese tipo, que, aunque es buena, no incluye en términos reales la participación de los pequeños agricultores en la creación de la nueva política agraria. Por tanto, es necesaria la presencia de los mismos para el logro de un verdadero consenso en la creación de la política agraria. También habría que ver si los directores de cada una de las gremiales (la ya mencionada CAMAGRO y PROLECHE, entre otras) representan totalmente los inte-

análisis económico

reses de sus asociados. Ojalá que este tipo de reuniones no se traduzca en una serie de entendimientos entre viejos conocidos que establecen sus intereses particulares sobre los intereses de la gran mayoría de productores agrícolas del país.

Los gobiernos de ARENA: un proyecto histórico para El Salvador

Cuando el nuevo presidente de la República tomó posesión de su cargo, el pasado primero de junio, rememoró todas las “buenas obras” de los anteriores gobiernos areneros. Dentro de este marco, el nuevo mandatario expresó que el país ha logrado notables progresos desde que el partido oficial accedió al Ejecutivo en 1989. Sobre la base de estas palabras sería bueno preguntar: ¿por qué hasta el cuarto gobierno de ARENA se le presta atención al problema agrario? Si es cierto que los sucesivos gobiernos de ARENA se pueden entender como una línea que conduce al desarrollo del país, ¿por qué no se le prestó la atención debida al sector agrícola desde el gobierno de Cristiani?

Las respuestas a esta interrogante pueden ser muchas, pero parece de singular importancia reconocer, antes de dar una respuesta, que el actual interés del Ejecutivo por una política agraria resulta un tanto extemporáneo. Después que la economía ha gozado de una década en proceso de apertura comercial, y que parece consolidarse a través de la firma de tratados de libre comercio, se viene a hablar de la necesidad de “productividad”, “competitividad”, “eficiencia” y que para ello es necesario una política activa del gobierno en el sector.

Sin embargo, como esa política activa no se realizó debido a que los gobiernos pasados estaban interesados en privatizar la banca y las empresas estatales y en dolarizar la economía, se profundizó la pobreza dentro de las zonas rurales del país. Con esto, no se quiere decir que una reestructu-

ración de la banca y algunas empresas del Estado no haya sido necesaria para el mejor funcionamiento de la economía, sino que se excluyó una política agrícola en beneficio de los habitantes del campo.

Un proyecto económico a largo plazo

Desde una perspectiva económica, el sector agrícola es clave, debido a que es uno de los principales generadores de riqueza. Es productor de alimentos y materias primas que son insumos en el proceso de producción del país. Tomando como base a este sector primario de la economía, se empieza a construir un modelo económico que busque ser sostenible y viable en el largo plazo. Sin embargo, un mayor énfasis en el crecimiento del sector terciario difícilmente puede generar un crecimiento armónico de la economía.

En parte por lo anterior, se puede entender como nuestra economía se caracteriza por consumir más de lo que produce. No tenemos sectores que realmente produzcan un alto valor agregado (agrícola e industrial-manufacturero). También explica por qué tenemos un déficit comercial cada vez mayor, pues muchos de los insumos que utilizan las empresas del país no provienen de nuestro sector primario, sino que son importaciones. La demanda de artículos de consumo final se satisface mayormente con productos importados, dado el estancamiento del sector agrícola, el cual es clave como dinamizador de la producción.

Es de esperar que la nueva política agrícola que desea implementar el MAG con el concurso de las diferentes gremiales pueda considerar realmente el papel de los pequeños productores agrícolas y, conjuntamente, la necesidad de desarrollar un sector primario pujante y capaz de producir una mayor cantidad de alimentos y de insumos. Con ello podría lograrse un crecimiento estable y sostenible en el largo plazo.

El sistema de pensiones de El Salvador: el costo de la inseguridad

El pulso de la coyuntura económica en el mes de junio se ha visto impregnado por dos factores interesantes: por un lado, los medios de comunicación se han dedicado día a día a ensalzar y relatar con un optimismo desmesurado cada movimiento de la política económica y social de la nueva administración de Antonio Elías Saca, dando por descontado que será exitoso, sin cuestionar en ningún momento su viabilidad ni la manera en que serán impulsados los proyectos.

Por el otro, en el plano económico y social, la realidad se destaca por la manera en que la arquitectura de la política económica y social de Saca parece estar construyéndose sobre “arenas movedizas”, en términos de la factibilidad de llevar a cabo dichas políticas económicas. El desafío ineludible para la actual administración es encarar los retos de responder a la población con una mejor cobertura en educación, salud, seguridad social, vivienda, etc., tomando en cuenta las limitantes estructurales del déficit fiscal en las arcas del Estado.

Con respecto a la seguridad social, se destacan los cambios que se han dado en el rubro del sistema de pensiones que cubre el retiro de miles de salvadoreñas y salvadoreños. Con las nuevas reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en la Ley de Pensiones, la jubilación de los empleados públicos y privados queda sujeta al cumplimiento de treinta años de servicios laborales y a sesenta años de vida para los hombres y cincuenta y cinco para las mujeres. También se incrementa a 114 dólares la pensión mínima y la “revalorización” anual de todas aquellas pensiones arriba de 114.1 hasta 300 dólares. ¿Cuál es la diferencia?

Con respecto a los anteriores estándares, hay una restricción mucho mayor para que las personas sean “calificables” para retirarse, lo cual encierra una injusticia, pues no responde al principio de “seguridad” que dice brindar dicho sistema de pensiones. La anterior normativa permitía que todas aquellas personas con 30 años de servicios laborales, sin importar

cuántos años de vida poseían, pudiesen jubilarse con el goce de la pensión que cotizaron durante sus años laborales ya sea en el Instituto Nacional de Pensiones Públicas (INPEP), en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o las Administradoras para fondos de Pensiones (AFP).

Esta política económica eleva inevitablemente la precariedad de la calidad de vida de miles de personas, especialmente de los más pobres, puesto que en el contexto del país, son precisamente estas personas las que comienzan a incorporarse a la fuerza laboral a edades más tempranas para obtener su sustento y, a su vez, son las personas que tienden a tener una menor esperanza de vida que el resto de la población. Con esta normativa, los más vulnerables siguen cargando con el mayor peso regresivo de las políticas económicas enmarcadas en el “ahorro de recursos” del Estado. En aras de ahorrar fondos y aumentar la eficiencia, se ha elegido disminuir la cobertura de la población en términos de seguridad social.

Por otro lado, sobre el segundo aspecto reformado, los beneficios parecen ser demasiado limitados y parciales. Según indicó el representante de la Asociación Pro Rescate de Pensiones, Armando Serpas, esta acción no era el objetivo inicial, pues originalmente se apuntaba hacia una revalorización general de las pensiones del 6%, debido a que el costo de la vida había aumentado enormemente en estos últimos años y ya habían pasado casi siete años en que no se había modificado el valor de las pensiones.

El último año en que fueron revalorizadas todas las pensiones fue 1998, durante la administración del presidente arenero Armando Calderón Sol. En aquella ocasión, se dio un aumento del 6%, lo que significó una erogación de 8.7 millones de dólares. En esta ocasión, el aumento de la pensión mínima significa un desembolso extra de 2 millones 600 mil dólares, que serán distribuidos entre 39 mil 950 pensionados del sistema público y privado. Para el ejercicio fiscal de este año, el Estado des-

embolsará un total de 301 millones de dólares, que serán costeados con bonos (léase deuda) y con la venta de acciones de la desaparecida Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

Como se puede observar, estos movimientos pueden ser armas de doble filo para el bienestar económico del país a largo plazo si el Estado no administra de manera óptima los recursos e incurre en más deudas; pero también si, por su ansia de ahorrar recursos, golpea regresivamente los bolsillos de los segmentos de población más vulnerable a ese tipo de ajustes. Además, existe otro problema implícito: el hecho de que el 80% del dinero de la población afiliada se encuentre en manos del Estado, incrementa el riesgo en caso que haya un problema en el aparato estatal, o que cambie la tasa de interés sustancialmente, por lo que las propuestas se basan en la seguridad de las inversiones. ¿Cuál es el problema de fondo?

La filosofía de la seguridad social en El Salvador: negocio e inseguridad

La reforma del sistema de pensiones entró en vigencia en enero de 1997 y trajo consigo cambios, no sólo en el área de pensiones, sino también en otras esferas de la seguridad social. De esta manera, la filosofía del sistema previsional dejó de darle prioridad a la cobertura y empezó a enfocarse en consideraciones de “eficiencia” y calidad, palabras que parecen asociarse automáticamente con la privatización. Lo que sí es incuestionable es que esta función de seguridad previsional para el retiro digno de las personas es una obligación que el Estado no puede ni debe eludir, al dejarla en manos privadas, tales como las AFP.

De hecho, esta función del Estado no se entiende tan sólo como un simple deber, sino como un rasgo elemental de justicia social, puesto que la seguridad social es un derecho humano. Así lo reconoce el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensa-

bles a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

A esta visión de la función del Estado se agrega lo expuesto en el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), que asevera lo siguiente: “toda persona tiene derecho a la seguridad social que lo proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

Al restringir esta función a la acción estatal, el compromiso es, sin duda, grande para un país pobre como El Salvador. Empero, el hecho de poseer recursos escasos no exime de hacer política progresiva o con justicia social. Las AFP tienen un problema de fondo: si son mal administradas, podrían poner en peligro la vida misma y esto es algo que no le compete ni le interesa al capital privado. De ahí el rol activo que debe tener el Estado. Si esto no se toma en cuenta, la vulnerabilidad a futuro de la población crecerá, y el camino de las personas que se esfuerzan por asegurar un retiro digno estará minado por obstáculos fuera de la voluntad de la ciudadanía.

Actualmente en El Salvador, las AFP administran un fondo de 1.500 millones de dólares y se espera que en 2009 llegue a los 5 mil millones. Sin embargo, según afirman analistas de este sector, el mercado local será incapaz de absorber los recursos que se están generando, y eventualmente la rentabilidad tenderá a caer, por lo que las AFP deben ser autorizadas para que inviertan una parte de sus fondos en el extranjero. Pero si se depositan esos fondos en el extranjero, ¿cómo garantizar que la Seguridad Social sea efectivamente segura? Si se da un problema con los fondos en el extranjero, ¿con qué cara les dirá a los pensionados que la rentabilidad ha caído del 12 al 2%? En conclusión, es evidente que la actual coyuntura enseña que la política económica, financiera y social son sectores de igual importancia que la administración arenera deberá aprender a coordinar entre sí y con responsabilidad, para que en su conjunto ninguna prive por sobre la otra y responda a su función constitucional de estado social.

Reformar el neoliberalismo

El trigésimo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas se está llevando a cabo en un clima de escepticismo hacia la globalización, que hasta hace poco se promovía como una panacea para los problemas del subdesarrollo. En la citada reunión, que se efectúa en San Juan de Puerto entre el 28 de junio al 2 de julio de los corrientes, se discute el documento titulado *Desarrollo productivo en economías abiertas*, el cual se comentará en las siguientes líneas.

Simplificando las ideas, lo que la CEPAL plantea en ese documento es que el viraje dado por las economías latinoamericanas durante las dos décadas pasadas ha tenido logros importantes, pero también fallas. CEPAL sostiene que las fallas se pueden corregir sin echar por la borda los puntos positivos logrados.

Explicitando lo anterior, ello equivale a decir que para el organismo internacional las políticas neoliberales y la manera en que las economías de la región se han insertado en la globalización ha sido positiva, aunque eso ha tenido costos sociales que habría que subsanar. En el documento puede leerse lo siguiente: “La CEPAL sostiene que es necesario construir sobre lo ya conseguido, pero también es preciso superar las brechas existentes y abordar los temas aún no tratados. Los avances que se consigan pueden incluso ser esenciales para consolidar una mayor integración en el plano mundial y, a la vez, para impedir que los costos sociales, económicos y políticos asociados al proceso de reformas económicas hayan sido en vano”.

La economía latinoamericana entre 1990 y 2003

Es en el decenio anterior cuando toda

la región latinoamericana, con la salvedad de Cuba, se vuelca hacia las políticas de ajuste estructural dictadas por el Consenso de Washington, como primer requerimiento para la entrada de Latinoamérica en el proceso de globalización liderado por Washington. El documento señala que entre 1990 a 2003, el crecimiento regional fue sumamente modesto, con una tasa media equivalente al 2,6%, superado incluso por África, Asia y el Medio Oriente.

Otra característica de la coyuntura económica existente en la región es la relación entre las exportaciones y el crecimiento económico. En América Latina se dio una tasa de crecimiento de las exportaciones, mayor a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Las exportaciones en América Latina y el Caribe “se expandieron a una tasa promedio alrededor de 3,5 veces mayor que la del producto entre 1990 y 2003, mientras que dicha relación fue de 1,4 en la provincia china de Taiwán, de 1,6 en China y de 1,8 en la República de Corea e India.”

Según la CEPAL, un tercer elemento que caracteriza a Latinoamérica es el predominio de las empresas transnacionales, a las cuales define certeramente como “oligopolios y conglomerados globales”. Las empresas transnacionales han cobrado un especial protagonismo durante el período señalado, “debido a que han podido reaccionar más rápidamente [...] a los cambios en la forma de organización de la producción y han logrado aprovechar sus ventajas competitivas para organizar sistemas internacionales de producción integrada”.

Dicho de otra manera, las transnacionales, al lograr controlar la cadena productiva a escala global, han tenido éxito en un contexto regional de liberalización de las economías. Hay que recordar que ese contexto se ca-

racteriza por una disminución paulatina, pero acelerada, del papel regulador del Estado, al cual las élites económicas le asignan un rol subordinado a los intereses privados. Al no haber regulación de la economía, sobreviene la ley del más fuerte. Eso explica el éxito de las transnacionales, que entran con ventajas a los mercados locales carentes de regulaciones.

Al revisar la información que brinda el documento, puede observarse cuál ha sido el destino de las inversiones extranjeras en la región. El sector más privilegiado ha sido el de los servicios. En un segundo término, se encuentran las manufacturas, mientras que el sector primario está relegado al tercer lugar. Obviamente, la inversión masiva en el sector servicios crea, en el plazo inmediato, más fuentes de trabajo, aunque no es garantía de un crecimiento sostenido en el plazo posterior.

Si las transnacionales tuvieron un auge en el período reseñado en el documento de la CEPAL, el capital financiero también logró predominar en la economía mundial. Para concluir, se señala que las naciones desarrolladas son las que concentran las innovaciones y el progreso técnico. Estos tienen el 84,4% del gasto bruto en inversión y desarrollo.

Los aspectos negativos

El documento elaborado por la CEPAL admite que “la globalización ha dado origen no sólo a una creciente interdependencia, sino también a marcadas desigualdades entre países, debido a que en los procesos económicos no se han tomado en consideración los recursos y posibilidades de los diferentes países”. Hace también un importante llamado: “en muchos casos no sólo no se ha prestado debida atención a las desigualdades iniciales con el objeto de crear un mundo más equitativo, sino que, además, los países en desarrollo han operado en un ‘campo de juego esencialmente desnivelado’”. La historia reciente de

Centroamérica es una constatación de esos desniveles. El Tratado de Libre Comercio (TLC) al que se proyecta llegar con EEUU llegó a una cantidad de acuerdos en los cuales se otorgaron amplias ventajas a la inversión de capital estadounidense en la región, sin salvaguardar los intereses de los productores locales y las empresas medianas y pequeñas, y sin proteger el medio ambiente.

Si llegar a cuestionar el proceso de globalización actual, para la CEPAL se impone un cambio de rumbo, con “nuevas instituciones que concilien un manejo más eficiente de la interdependencia global con la adopción de principios claros de solidaridad internacional”, pues, citando la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, “sólo así será posible conseguir que la mundialización ‘se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo’”.

¿Un sueño realizable?

El enunciado anterior parece otra de tantas declaraciones de buena voluntad que, en las reuniones de organismos internacionales, produce la constatación de que todo va mal, pero que, por urbanidad o por corrección política, no hay que admitirlo.

El documento de la CEPAL ambiciona ir más allá. Básicamente, lo que pretende es reformar el modelo neoliberal imperante, recuperando la importancia de las políticas públicas. Frente al dogmatismo neoliberal, la CEPAL plantea que hay que pasar a un enfoque “en que, sin renegar de los progresos logrados en el desarrollo de economías de mercado, se revaloriza la necesidad de un mejor gobierno, es decir, de un gobierno que realice mejores intervenciones en términos cualitativos”.

Se plantea, además, “establecer un nuevo equilibrio entre las iniciativas privadas y el interés público, prestando especial atención a la igualdad de oportunidades y la cohesión social”. Se parte de la constata-

ción del efecto disgregador que el neoliberalismo ha obrado en las colectividades.

Aunque en el documento no se le llame por su nombre, es evidente que se refiere al neoliberalismo cuando admite que “muchos ciudadanos y grupos sociales han ido perdiendo su sentido de pertenencia junto a la capacidad de asumir como propios los objetivos comunes”. Obviamente, un modelo socioeconómico y político que exacerba lo privado sobre lo público, termina construyendo sujetos extremadamente individualistas. Para superarlo, “se debería devolver al concepto de política pública su sentido original, ‘toda forma de organización de decisiones que persigue fines de interés común’”.

Ese balance entre lo público y lo privado se complementarían con la asunción de las desigualdades económicas que operan en el seno de cada país —las empresas de gran tamaño, que coexisten con empresas informales y con medianas y pequeñas empresas— y las que existen en el ámbito internacional. Las políticas públicas vendrían a “nivelar el campo de juego” en el cual los actores económicos se desempeñan en desigualdad de condiciones.

Las políticas públicas se orientarían, pues, a superar esas diferencias. El documento de la CEPAL plantea tres estrategias: la inclusión, la modernización y la densificación. Por inclusión entiende la inversión pública destinada a trasladar el mayor número de empresas informales posibles al sector formal. Recuérdese que el sector informal, con todo y lo numeroso que es, está marginado de créditos y de seguridad social, así como de otros beneficios. Es muy difícil que se le considere un interlocutor válido en la toma de decisiones de la política económica.

La modernización se concibe como modernización productiva, lo cual “comprende

políticas horizontales destinadas a mejorar el acceso a la información, el crédito, la tecnología y los sistemas de comercialización. La densificación, finalmente, es el proceso orientado a la cualificación técnica de los sectores productivos y al fortalecimiento de la asociatividad de las empresas medianas y pequeñas y de los vínculos de éstas últimas con empresas mayores. Todo lo anterior, señala el documento, requiere de la transparencia de las políticas públicas.

La postura de la CEPAL deja intacto el nivel de intervención del Estado que le han asignado los modelos neoliberales, al afirmar que “en una economía abierta se dispone de menos instrumentos de política que, además, son más limitados en su alcance que los utilizados en economías semicerradas”. Es improbable, pues, según lo afirma el documento, volver a contar con políticas públicas que brinden incentivos sustanciales para el desarrollo económico, o que intervenga directamente, por la vía de las restricciones arancelarias, para la protección de sus sectores productivos internos.

Aunque hay un reconocimiento de los graves errores de los experimentos neoliberales en la región, el documento de la CEPAL opta claramente por las llamadas “economías abiertas”, esto es, neoliberales. Eso sí, con un Estado que atempere los excesos del modelo, pero sin modificar sus deficiencias de raíz. El Estado no cambia mayormente su papel subordinado a los intereses privados. Se le relega a un papel de intervención para minimizar los desequilibrios del modelo neoliberal, pero no se le restituye el importante papel que puede tener para la defensa del interés común. Sin una solución estructural a los problemas del modelo neoliberal, seguirán permaneciendo las causas que originan el descontento social con el mismo.

Los gritos del silencio

En reiteradas ocasiones hemos dicho cuál es el objetivo que queremos alcanzar con este espacio: no se trata sólo de analizar críticamente los aspectos más destacados del acontecer nacional e internacional desde los derechos humanos, sino también aquellas buenas prácticas que alienen la participación ciudadana para la transformación social. Precisamente por eso, en esta ocasión vamos a comentar y analizar un hecho sin precedentes en la región, la “marcha del silencio”, celebrada el pasado domingo 27 de junio en varias ciudades de dieciséis estados mexicanos en protesta por la delincuencia y como exigencia ciudadana contra la impunidad. Analizaremos, entonces, lo más destacado del evento así como su trascendencia y las repercusiones del mismo para nuestro país y la región.

Centenares de miles de personas, junto a grupos representativos de la sociedad civil y la iniciativa privada, formaron parte de esa gran movilización reclamando medidas urgentes para reforzar la seguridad pública en aquel país. La más relevante de las marchas fue la del Distrito Federal, donde una enorme cantidad de gente desfiló por las principales avenidas en una inédita manifestación contra los mencionados flagelos. Tan novedosa fórmula participativa fue organizada en un abrir y cerrar de ojos; tardaron sólo tres semanas. Durante la convocatoria y por los reproches manifestados en la marcha, quedaron claras las duras críticas contra las autoridades públicas por no frenar la ola de secuestros que continúa en una escalada ascendente y preocupante.

De este modo, hombres y mujeres de todas las edades, vestidos de blanco y negro caminaron hasta la inmensa explanada del Zócalo —en el corazón de la capital federal mexicana— en la que se considera

la mayor manifestación de protesta en ese país durante la última década. En todas las marchas que se efectuaron, sus participantes portaron fotos de familiares asesinados por secuestradores y mantas demandando un “ya basta” a la inseguridad. Entre las muestras de indignación, destacaron también las niñas y los niños que portaban escrita su principal demanda: “Quiero vivir sin miedo”.

Sorprendentemente, esta demostración popular y masiva rebasó todas las expectativas y los propósitos de sus convocantes y organizadores. Tanto así que se han convertido ya en expresiones clamorosas de una sociedad exasperada por la delincuencia en todas sus expresiones y no sólo por el secuestro con propósito de extorsión. Los cientos de miles de personas que se integraron, pusieron de manifiesto un consenso que no es únicamente de rechazo y repudio al alza de los índices delictivos sino contra la ilegalidad en general y —sobre todo— contra la impunidad. El reclamo no era exclusivo; fue hecho tanto a las autoridades federales como a las estatales y municipales.

De un mar de gente en silencio se levantaron luego las voces y el clamor: “¡En paz!” “¡Ya basta!, ¡Ya basta!” “¡Sí se pudo!, ¡Sí se pudo!”. En la movilización del Distrito Federal, resultó particularmente claro el protagonismo de sectores y organizaciones sociales. Un caso ilustrativo y ejemplar es el de la asociación de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez —“Nuestras Hijas de Regreso a Casa”— cuyas integrantes estuvieron en primera fila. “¡No venimos a ser relleno! ¡Estamos aquí para exigir justicia!”, exclamaban esas mujeres madres de las víctimas de Juárez, víctimas ellas también. Así se dio cabida en la multitudinaria protesta ciu-

dadana, a los “feminicidios” en aquella ciudad fronteriza.

También merece destacar el acto final de la gran marcha. Desde el atrio de la catedral metropolitana en el Distrito Federal fueron lanzados mil globos: quinientos negros, por el sufrimiento y el duelo, y otro tanto blancos por el fin de la violencia y la inseguridad. También, como hecho inusual, durante quince minutos las treinta y cinco campanas del recinto religioso repicaron ante una multitud que coreaba: “¡Ya basta a la inseguridad!”. Tras encabezar el lanzamiento de los globos, el cardenal Norberto Rivera dijo que la “marcha del silencio” debía enseñarles “a escuchar al pueblo”; además, agregó que les permitía “afirmar que el problema de la inseguridad es algo real, no inventado por un grupo u otro, sino (que) es un sentimiento del pueblo que se siente indefenso, que siente que la delincuencia va creciendo y que hay impunidad en el país”.

Al terminar la homilía, se leyó un documento denominado “Negro y blanco desde Catedral” firmado por José de Jesús Aguilar, sacristán de la catedral. En él se advierte que durante los últimos años muchos fieles acudieron a los templos católicos a pedir por la salud de algún ser querido, asaltado y herido; por alguna hija o hermana violada; por la pronta localización y recuperación de un niño robado; por la libertad de alguna persona secuestrada; por el eterno descanso de quienes perdieron la vida en un asalto o secuestro. El documento también menciona a las mujeres que ruegan por el hijo o el esposo delincuente. Muchos preguntan a Dios en las iglesias: ¿Por qué?; pero al salir le hacen la misma pregunta a los gobernantes. Por eso —dicen las autoridades eclesiales— y en señal de solidaridad y comprensión hacia las y los fieles que experimentan angustia y dolor por la inseguridad, se lanzaron mil globos blancos y negros.

Ante semejante participación ciudadana, la Presidencia de la República dijo comprometerse con el reclamo popular y fue obligada a fijar una postura oficial. Los voceros de Vicente Fox “reconocieron y valoraron” la gran participación ciudadana, al tiempo que se comprometieron a escuchar y recoger las demandas expresadas; asimismo, estimaron que la gente demostró “dignidad y civismo al expresar de manera ordenada y pacífica sus exigencias y sus reclamos”.

En suma, la manifestación del pasado 27 de junio fue un paso importante hacia la toma de conciencia colectiva sobre la extensión de la criminalidad en México. En esa lógica, debe entenderse que la delincuencia no es sólo la que afecta a miembros de la clase pudiente en sus personas y sus bienes —quienes muchas veces son víctimas de secuestro— sino también la extensa red de corrupción que va desde las patrullas policiales y funcionarios de prisiones hasta los ministerios públicos, pasando por despachos privados de altos funcionarios.

En El Salvador, la realidad es diferente a la mexicana. Desde hace tiempo, la actuación de los representantes del soberano —es decir, del pueblo— y sobre todo la de quienes pertenecen a los partidos políticos mayoritarios, no ha redundado en mejoras sustantivas para la calidad de vida de las mayorías. En tal escenario, la participación social pasó de estar amenazada a quedar atrapada en un peligroso círculo vicioso donde predominan la exclusión amplia, la violencia, la inseguridad, el temor, la desconfianza y la frustración. Todo eso, lógicamente, conduce a la apatía y al establecimiento de prioridades individuales en el día a día, sin esperar nada de las instituciones. Así, se buscan soluciones “fáciles” e inmediatas a ciertos problemas y se incrementa la falta de intervención ciudadana en los asuntos de interés colectivo.

Frente a esta situación el reto es claro: fomentar el empoderamiento de la gente mediante su participación organizada, como contrapeso indispensable y garantía necesaria para evitar un mayor desbalance y la debacle.

El mensaje del domingo, enviado por la sociedad mexicana, es una importante muestra de cómo puede ser ejercida la responsabilidad social. Supone, además, un buen ejemplo de exigencia ciudadana a las autoridades públicas y de solidaridad con las víctimas, ya demasiadas sin contar aquellas que lo son en potencia.

En nuestro caso, nos queda mucho ca-

mino por andar para hacer realidad ese tipo de expresiones ciudadanas contra la impunidad, la violencia social y la corrupción que nos afectan en serio. Pero no debemos caer en la desesperanza, pese a que no corran buenos tiempos para los derechos humanos. Marchas como las del pasado domingo en México son la prueba evidente de que algo ha cambiado en la conciencia ciudadana de sus habitantes. ¿Cuánto tiempo más esperaremos nosotros? ¿Cuántas víctimas más serán necesarias para que exijamos y logremos el fin de la impunidad en nuestro país?

El semanario *Proceso* selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. *Proceso* es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	\$ 50.00
El Salvador	
personal	\$ 12.00
correo	\$ 18.00
Centro América y Panamá	\$ 35.00
Norte y Sur América	\$ 65.00
Europa y otras regiones	\$ 80.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre *Proceso* marque (503) 210-6671 o escribanos a cidai@cidai.uca.edu.sv